

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

EXPEDIENTE: 2015-00342

**LUIS BARRERA MORENO VS. MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA
NACIONAL**

Pasa al Despacho el proceso radicado por el señor LUIS BARRERA MORENO, en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, con una solicitud presentada el 24 de febrero de 2021 (fls. 161 al 162 vto), por el apoderado judicial de la parte actora, en donde solicita aplicación al artículo 298 del C.P.A.C.A.

I. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Con fecha 18 de agosto de 2016 (fls. 125 al 139), se profirió sentencia condenatoria en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en donde se ordenó el reajuste de la pensión de invalidez del señor LUIS BARRERA MORENO, conforme al Art. 14 de la Ley 100 de 1993 para los años 1997, 1999, 2002 y 2004, sentencia que según lo manifestado por la parte actora en escrito de fecha 24 de febrero de 2021 (fls. 161 al 162 vto), no ha sido cumplida a la fecha.

En virtud a lo anterior, el apoderado judicial de la parte actora con escrito de fecha 24 de febrero de 2021 (fls. 161 al 162), solicita dar aplicación a lo establecido en el artículo 298 del C.P.A.C.A., en donde se establece que si luego de transcurrido un año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria, esta no se ha pagado, el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

El referido artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que la parte actora solicita sea aplicado en este asunto, refiere lo siguiente:

“ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.

En los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, la orden de cumplimiento se emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. El juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este Código”.

Como se observa, la norma antes transcrita deja claro que luego de un 1 año desde la ejecutoria de la sentencia en la que se condene a una entidad al pago de sumas de dinero, sin que haya sido cumplida, el Juez que profirió esa decisión, ordenará su cumplimiento inmediato. Estableciendo igualmente que en los casos de decisiones en firme proferidas dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos el término para ordenar su cumplimiento es de 6 meses desde la firmeza de la decisión.

Para el efecto debe indicarse que si bien el artículo 298 del CPACA faculta al juez a exigir el cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida, esa trámite difiere ostensiblemente al que debe impartirse al proceso ejecutivo, ya que este último se encuentra regulado por el C.G.P., tal y como ha sido considerado por el H. Consejo de Estado en providencia del 15 de noviembre de 2017, Consejero Ponente: Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez dentro del proceso No. 54001-23-33-000-2013-00140-01 (22065), en donde se estableció lo siguiente:

“El interesado en la ejecución de condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero cuenta con dos posibilidades: (i) la presentación de demanda ejecutiva ante juez de primera instancia del proceso en que fue emitida la condena [artículos 162, 163, 192 y 299 del CPACA y 306, 307 y 430 del CGP], o (ii) la solicitud al juez de conocimiento para que requiera a la autoridad condenada, sin que eso implique adelantar un proceso ejecutivo [artículo 298 del CPACA]. Es decir, existe una clara distinción entre el procedimiento de cumplimiento y la ejecución de la sentencia. Con todo, hay que resaltar que la efectividad del procedimiento de cumplimiento es precaria, pues el juez únicamente puede requerir el cumplimiento a la autoridad presuntamente morosa. Mientras que el proceso ejecutivo es más eficaz, por cuanto, de cumplir la demanda los requisitos, el proceso inicia con el mandamiento ejecutivo, que no es otra cosa que la orden forzosa de que la entidad cumpla la sentencia condenatoria, (...) ii) Solicitar que se requiera a la autoridad obligada al cumplimiento de estos títulos con obligaciones dinerarias para que proceda a su cumplimiento

inmediato si en el término de 1 año o 6 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia o a la prevista para su cumplimiento en el mecanismo de solución de conflictos, esta no lo ha realizado, según el caso. En este evento el mismo juez de conocimiento procederá a librar un requerimiento de carácter judicial en el que indique las consecuencias legales de carácter penal y disciplinario de ese proceder, sin que ello conlleve adelantar un proceso ejecutivo. En efecto, en el proyecto inicial del CPACA se había previsto que el incumplimiento a la orden del juez en este caso constituiría “[...] infracción disciplinaria gravísima, sancionable con destitución del cargo, aplicable al Jefe Superior de la Entidad y a los demás funcionarios responsables de la omisión, mediante el proceso oral a que se refiere el Código Único Disciplinario [...], previsión que fue eliminada en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes para segundo debate del proyecto, en la medida en que estas implicarían unas consecuencias que no corresponden al proceso ejecutivo. Así las cosas no se señalaron procedimientos posteriores a realizar con base en esta orden de cumplimiento dada por el juez, por lo que no podría asimilarse la misma a un mandamiento de pago con las consecuencias y procedimientos previstos en el CGP para la ejecución de las providencias judiciales”.

De la misma forma, el Consejo de Estado en el auto Interlocutorio de Importancia Jurídica O-001-2016 de fecha 25 de julio de 2017, proferido dentro de la radicación 11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14), estableció frente al tema el siguiente criterio:

“2. Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del C.P.A.C.A., a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.

En este caso el objetivo será que la sentencia se ejecute a través de un proceso ejecutivo autónomo de conformidad con el Libro Tercero Sección Segunda, Título Único del Código General del Proceso, relativo al proceso ejecutivo, en aplicación de la remisión normativa regulada por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.”
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

La jurisprudencia antes referida, deja claro que el interesado a fin de exigir el cumplimiento de las condenas impuestas por la jurisdicción cuenta con 2 posibilidades, una de ellas es instaurar el proceso ejecutivo con el lleno de los requisitos previstos por el CPACA y el CGP, y la otra, solicitar al juez de conocimiento se requiera a la autoridad condenada en virtud del artículo 298 del CPACA, sin que en este último caso implique el inicio de un proceso ejecutivo. La máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo, ha sido enfática en establecer

que el procedimiento de cumplimiento fijada en el artículo 298 ibídem es precario, pues el juez se encuentra facultado únicamente para requerir a la autoridad morosa el cumplimiento de la orden, indicándole las consecuencias legales de carácter penal y disciplinario que conllevan el incumplimiento, sin que pueda librarse dentro de dicho trámite mandamiento ejecutivo que ordene el cumplimiento efectivo de la sentencia.

De igual forma, se recalca que el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011¹ no prevé de manera expresa las consecuencias que conllevan el incumplimiento de las sentencias, por lo que es preciso remitirse a lo indicado en el penúltimo inciso del artículo 192² del CPACA que señala que el incumplimiento por parte de las autoridades de las sentencias o conciliaciones acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar. Por lo anterior, a efectos del requerimiento se prevendrá a la parte accionada sobre lo dispuesto en el artículo ante dicho.

Como quiera que en el presente asunto, no fue acreditado el cumplimiento al fallo proferido por este Despacho el 18 de agosto de 2016 (fls. 125 al 139), y teniendo en cuenta que el apoderado de la parte actora mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2021 (fls. 161 al 162), solicita se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 298 del CPACA, se procederá por esta instancia judicial a requerir a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – CAJA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL - CAGEN, para que imparta el cumplimiento inmediato a la sentencia proferida por este despacho, advirtiéndole que el incumplimiento puede acarrearle las sanciones previstas en el penúltimo inciso del artículo 192 ibídem.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la providencia del H. Consejo de Estado³ relacionada de manera precedente indica que no se señalaron procedimientos a realizar posteriores al requerimiento de cumplimiento, se ordenará en la parte resolutive de la presente providencia el archivo del expediente, una vez sea efectuado el requerimiento anterior.

¹ por la cual se expide el Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo

² ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. (...) El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes."

³ H. Consejo de Estado en providencia del 15 de noviembre de 2017, Consejero Ponente: Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez dentro del proceso No. 54001-23-33-000-2013-00140-01 (22065)

Por lo expuesto el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República,

I. RESUELVE:

PRIMERO: REQUERIR POR SEGUNDA VEZ al representante legal de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional– *CAJA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL - CAGEN*, a fin de que se sirva **dar cumplimiento inmediato** a la sentencia proferida por este despacho el 18 de agosto de 2016 (fls. 125 al 139), en donde se condenó a la entidad demandada a reajustar la pensión de invalidez del señor LUIS BARRERA MORENO, conforme al Art. 14 de la Ley 100 de 1993 para los años 1997, 1999, 2002 y 2004.

SEGUNDO: ADVERTIR al representante legal de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional que el incumplimiento de la orden judicial mencionada acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar, previstas en el penúltimo inciso del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERO: En virtud a lo informado por el ejecutante se tiene como canal de comunicaciones el correo electrónico wilmar.coveteranos@gmail.com (fol. 154) y al correo eilelmi.91@gmail.com y se tiene como canal de notificaciones de la entidad ejecutada los correos electrónicos dispuestos para tal fin y, el correo electrónico decun.notificacion@policia.gov.co.

CUARTO: Todos los actos procesales deberán surtirse a los correos electrónicos de la oficina de apoyo judicial para los Juzgados Administrativos <<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>>; <<correscans2@cendoj.ramajudicial.gov.co>>., para efectos de radicación en el sistema de información siglo XXI, con copia al correo admin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, o al correo electrónico jadmin21bta@notificacionesrj.gov.co. Lo anterior en virtud al artículo 8 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021 y, debido a la emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional.

QUINTO: Una vez se haya dado cumplimiento a lo ordenado en los numerales 1 y 2, se ordenar el archivo de las presentes diligencias.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVA.


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

CATC